

El Acceso a la Información: un tema pendiente del proceso de democratización en Guatemala

Silvio Gramajo

La discusión del tema de Acceso a la Información Pública fue apropiada por el gobierno de la República debido a presiones tanto de organizaciones sociales como de organismos internacionales, con el fin de darle cumplimiento a los acuerdos de paz. Este proceso de gestión, en el cual participó el gobierno y la sociedad civil, se articuló un anteproyecto de ley en el cual hubo muchos consensos y disensos. No obstante, la parte oficial rompe la metodología de trabajo acordada y envía dicho anteproyecto al Congreso sin haber concluido la discusión final. Ahora dicho anteproyecto está en manos del Legislativo, el cual al parecer no le interesa incluirlo en su agenda, a pesar de la importancia que esta presentar para el proceso de democratización del país. (Palabras clave: acción, democratización, transparencia, rendición de cuentas.)



117

En 1985, con un proceso de elecciones libres y limpias, se inicia el camino hacia la democratización de Guatemala. Tras una serie de dictaduras militares, fruto de varios golpes de Estado o como producto de procesos electorales fraudulentos, que se sucedían desde 1953, se instaura un gobierno civil en el país democráticamente electo. El cambio o la transición pudo haber tenido varios motivos, pero hay uno que es irrefutable. Como señala Dahl, "las dictaduras militares habían sido bastante desacreditadas por sus fracasos, particularmente en América Latina".¹

¹ Dahl, Robert, *La democracia, una guía para los ciudadanos*, Taurus, Buenos Aires 1999, p. 7.



El gobierno de ese entonces, presidido por el demócratacristiano Vinicio Cerezo, estaba basado en una nueva Constitución Política, que entre otras cosas, establecía una serie de instituciones creadas para coadyuvar a la sostenibilidad del proceso democrático. Se crea, pues, la Corte de Constitucionalidad, El Tribunal Supremo Electoral y el Procurador de los Derechos Humanos. Sin embargo, una cosa es lo que está escrito en la ley y otra es lo que se ha cumplido en la práctica con el paso de los años. Por lo que el reto en Guatemala ha sido luchar tanto por reforzar las nuevas instituciones y prácticas democráticas, como por "la forma en que éstas pueden pasar la prueba del tiempo, el conflicto político y la crisis".²

No obstante, dejar atrás varias décadas de un sistema autoritario, en donde "la ausencia de garantías reales para el ejercicio de los distintos

² *Ibid.*, p. 8.

derechos políticos y civiles"³ era el *modus operandi*, no se logra con el simple arribo de un gobierno civil. Además, no se puede olvidar el hecho de que Guatemala es un país en el que hubo un conflicto interno entre la guerrilla, denominada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y el ejército, desde 1960 hasta 1996. Por lo tanto, en este periodo de transición, a pesar de haber tenido ya cuatro gobiernos civiles legítima y democráticamente electos, la ingerencia del poder militar en muchas de las estructuras de gobierno ha sido un hecho evidente. Como señala Morlino, se deja de ser un régimen autoritario, pero que aún no ha entrado del todo en el *genus* democrático.



Y es que, ¿la existencia de ciertas instituciones, características o prácticas democráticas son suficientes para que se pueda aseverar, de forma categórica, que en Guatemala se vive en plena democracia? Al parecer no. Por ello, entonces surgen otras interrogantes. Además de las instituciones antes mencionadas, ¿qué hace falta para poder vivir en una plena democracia que permita el desarrollo de una ciudadanía más libre y participativa? ¿Por qué unos países sí han alcanzado cierto desarrollo político y Guatemala no? Y finalmente, ¿qué condiciones favorecen el desarrollo y la estabilidad de las instituciones democráticas o qué condiciones son propensas para lo contrario?

Siguiendo el modelo que plantea Dahl, cualquier país para denominarse democrático, como mínimo, debería de poseer ciertos arreglos, prácticas e instituciones políticas que significan un avance, aunque no

³ Morlino, Leonardo, "Los Autoritarismos", en Pasquino, Gianfranco, et al., *Manual de Ciencia Política*, Madrid, Alianza, 1993, p. 131.

completo, hacia la consecución de los criterios democráticos ideales.⁴ Dentro de estas instituciones hay una que el autor denomina Fuentes Alternativas de Información. Y es precisamente desde esta perspectiva que se analizará el caso de Guatemala, ya que se pretende dar cuenta sobre el proceso de discusión del tema de acceso a la información pública y sus implicaciones en el desarrollo del proceso democrático y de construcción de ciudadanía del país.

Según el autor, se debe entender por "fuentes alternativas de información" aquella acción que ejercen los ciudadanos al solicitar información independiente de otros ciudadanos, expertos, periódicos, revistas, libros, telecomunicaciones y similares. Es decir, es el derecho que puede ejercer la ciudadanía para acceder a información que no está bajo el control del gobierno, ni de cualquier grupo político que intente influir sobre los valores y las actitudes políticas públicas; es un derecho que debe estar protegido por la ley.⁵

En teoría, en Guatemala el tema de acceso a la información pública no debería de generar mayores discusiones, ya que el mismo está constitucionalmente establecido, pero en la práctica dicho precepto legal no se cumple. Los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 plasmaron este derecho en la carta magna que fundamenta al Estado de Guatemala. El artículo 30 de la Constitución establece que "todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo la categoría

de confidencia". No obstante, debido a circunstancias de diversa índole, el ciudadano común no puede ejercer plenamente ese derecho.

Lo que ha sucedido, pues, es que por la situación conflictiva que ha vivido el país antes de que se firmaran los Acuerdos de Paz y posteriormente a ello, han permitido que cualquier petición ciudadana que se formula para acceder a información pública es negada rotundamente por los funcionarios gubernamentales, quienes cotidianamente argumentan a su favor basándose en cualquiera de las reservas establecidas constitucionalmente.

A pesar de existir un mandato legal y después de cinco años de haberse firmado los Acuerdos de Paz, en el país aún persiste una serie de prácticas autoritarias heredadas de los gobiernos militares, entre ellas, el secreto de Estado en donde todo queda enmarcado dentro del rubro de "seguridad nacional", aun cuando no tenga nexos con temas militares. Así también, existe el temor de hacer público todo lo referente a las ejecuciones presupuestarias, foco de corrupción que ha caracterizado al ejercicio gubernamental en el país. A esto se aúna el hecho de que los encargados de administrar justicia nunca han demostrado voluntad política para crear algún tipo de jurisprudencia al respecto, algo que ayudaría a que se pueda ejercer dicho derecho ciudadano.

Como señala Fernández Ramos, en un Estado autocrático la regla por naturaleza es el secreto, la cual asegura la arbitrariedad e incontrolabilidad del poder, pero en un Estado democrático la regla debe ser, por el contrario, la transparencia de la acción de los poderes públicos y el secreto la excepción. Norberto Bobbio, citado por Fernández, ha escrito que en el Estado autocrático el secreto de Estado —*arcana imperii*— no es la excepción



⁴ Según el autor, los arreglos son algo más bien provisional. Se tiende a pensar en prácticas como algo más habitual y, por lo tanto, más duradero. Y finalmente se piensa en instituciones cuando un hecho se ha asentado después de un largo itinerario. Cuando un país avanza desde un gobierno no democrático a otro democrático, los tempranos arreglos democráticos se convierten gradualmente en prácticas, que a su debido tiempo desembocan en instituciones asentadas.

⁵ Dahl, Robert, *op. cit.*, p. 100.

sino la regla: las decisiones políticas deben ser adoptadas lejos de las miradas indiscretas del público... La opacidad en las acciones es necesaria para garantizar la incontrolabilidad y la arbitrariedad.⁶

Debido a lo anterior, por el compromiso de Estado que tiene el gobierno de darle cumplimiento a los Acuerdos de Paz, en especial al inciso 52 del *Acuerdo Sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática*⁷ y por diversas peticiones tanto de grupos de la sociedad civil como de organizaciones extranjeras, como la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, se ha iniciado la discusión de un anteproyecto de ley sobre acceso a la información pública, documento elaborado por la Secretaría de Análisis Estratégicos de la Presidencia de la República.⁸

CRÓNICA DE UNA DISCUSIÓN INCONCLUSA

122

En Agosto de 2000, la referida dependencia gubernamental elaboró dicho anteproyecto y, con la finalidad de socializar el documento, convocó a organizaciones de la sociedad civil, para que conjuntamente lo discutieran y así articular un anteproyecto que contara con el consenso de las mismas.

Entre las organizaciones convocadas están la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, la Misión de Verificación de Naciones

⁶ Fernández Ramos, Severiano, *El derecho de acceso a los documentos administrativos*, Madrid, Editorial Marcial Pons, 1997, p. 311.

⁷ El acuerdo señala que "con miras a evitar cualquier abuso de poder y garantizar el respeto de las libertades y los derechos ciudadanos, el gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una ley que regule el acceso a la información sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, establecidos en el artículo 30 de la Constitución y que disponga de procedimientos y niveles de clasificación y desclasificación".

⁸ Antes era una dependencia denominada "El Archivo", ente que ofrecía servicios de inteligencia a la Presidencia de la República. Esta entidad, que fue creada con fines contrainsurgentes durante el conflicto armado interno, estuvo durante toda su existencia en manos de oficiales de inteligencia del ejército de Guatemala.

Unidas para Guatemala (MINUGUA), la Comisión Nacional de Justicia, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el Colegio de Abogados de Guatemala, el Instituto de Magistrados del Organismo Judicial, la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, la Fundación Myrna Mack y la Coordinadora de Oficinas de Derechos Humanos, Pastoral Social.

También fue invitada la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Familiares y Amigos en contra de la Delincuencia y el Secuestro (FADES), la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (ASIES), el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM) y el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IPES).

Según consta en el memorando No. 15/2000, del 17 de agosto de 2000, emitido por la SAE los invitados recibieron el borrador del anteproyecto de "Ley de Libre Acceso a la Información", con el fin de que el mismo fuera analizado y comentado. La oficina presidencial justificaba la creación de dicho anteproyecto como "parte del esfuerzo de poner en vigencia los controles jurídicos y sociales que fortalezcan las garantías ciudadanas de seguridad y acceso a la información", según señala el memorando. Por mandato presidencial, la elaboración del anteproyecto estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicación Social, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y la SAE. Otro de los hechos que motivaron la promoción de esta iniciativa, según consta en el documento oficial, era darle seguimiento a una de las recomendaciones que el Señor Santiago Canton, relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera al Estado de Guatemala, en su informe en el año 2000.

El anteproyecto, que constaba de 34 artículos, abarcaba temas como el acceso a la información sobre el funcionamiento de los distintos orga-

123



124

nismos del Estado, regulaba también lo relativo al acceso a información personal que estuviera en manos de organismos del Estado y entidades privadas (*habeas data*), excepciones, reservas, así como lo relativo a información secreta. Según el encargado de la SAE, dicho borrador habría sido enviado con anterioridad al relator de la OEA, para su revisión, quien posteriormente hizo algunos comentarios que fueron incluidos en el documento antes de ser distribuido a las organizaciones civiles.

Después de varios días, algunas de las organizaciones invitadas presentaron también sus respectivos comentarios y propuestas al anteproyecto. A manera de resumen, los participantes en la discusión concluyeron en que era un paso positivo y favorable para el proceso democrático la creación de una ley de esta naturaleza. Sin embargo, plantearon las siguientes observaciones: el proyecto evidenciaba falta de estructura, ambigüedades y confusión en los distintos conceptos y una de las observaciones más fuertes fue que el tema de acceso a la información y el *habeas*

data debían regularse en leyes distintas. Asimismo, existía el temor de que la ley fuera restrictiva y que cayera en inconstitucionalidades.

Entre los puntos de consenso a los que arribaron fueron la urgencia en la aprobación de la ley, en la importancia del concepto de interés público que le otorga la misma, la creencia en el derecho a la exhibición de información, la necesidad de otorgar temporalidad a la categoría de secreto y a la desclasificación automática, así como sobre lo perentorio que se hace establecer una cultura de vigilancia y responsabilidad sobre los funcionarios.

No obstante, una de las organizaciones insistió en que se abriera el proceso de discusión y se invitara a otros sectores como el académico y a los medios de comunicación, actores sociales de suyo importantes en el contexto político nacional y que quedaron fuera de la convocatoria oficial. Obviamente, la invitación no fue ampliada y tampoco éstos hicieron nada por incluirse en la discusión de un proyecto de semejantes magnitudes en la construcción de procesos de ciudadanización.

Posteriormente, la SAE retomando las propuestas y conclusiones de las diversas organizaciones a las que se les envió el anteproyecto, volvió a redactar una segunda versión y también preparó otro anteproyecto sobre clasificación de secretos oficiales como complemento al tema de acceso a la información.⁹

Respecto a la segunda versión del anteproyecto sobre acceso a la información, que se incrementó a 42 artículos, se evidencian ya algunos cambios, entre los que destacan el nombre que se propone para la ley. Este borrador ya plantea que la ley se denomine "Libre Acceso a la Información: derechos, garantías y defensas". Además, en la exposición de motivos ya se incluye como una de las razones que motiva la creación de la ley lo referente a la obligación que tiene el gobierno de darle cumplimiento a lo establecido en convenciones internacionales, así como también a los acuerdos de paz.

⁹ En esta nueva iniciativa se integra todo lo referente a las definiciones de conceptos relativos a la temática, niveles de clasificación y desclasificación de información, así como lo referente a la creación de los órganos de supervisión y coordinación en dicha materia.

125

Según consta en el memorando oficial, se incluyeron casi todas las observaciones y recomendaciones que hicieron las organizaciones civiles. No obstante, esto último al parecer no fue del todo cierto, pues en los documentos que dichas entidades remitieron a la SAE con las observaciones a esta segunda versión, se puede evidenciar una queja generalizada: sus distintas propuestas no están recogidas en el anteproyecto. Por lo anterior, SEDEM propuso modificar la metodología de trabajo: se plantea que, en aras de aprovechar los insumos de todos los participantes en la discusión, se realicen unas jornadas de trabajo entre abogados representantes de las organizaciones civiles y abogados de la SAE para redactar el documento con las propuestas de los participantes.

El anteproyecto promueve la reglamentación de tres derechos: la publicidad de actos administrativos, determinar los niveles de clasificación y desclasificación, así como el acceso de personas a información suya en archivos estatales (*habeas data*). No obstante, el desarrollo de estos tres derechos, según SEDEM, se hacen de forma simultánea y confusa, por lo cual se insiste en la recomendación de hacerlo de forma separada.

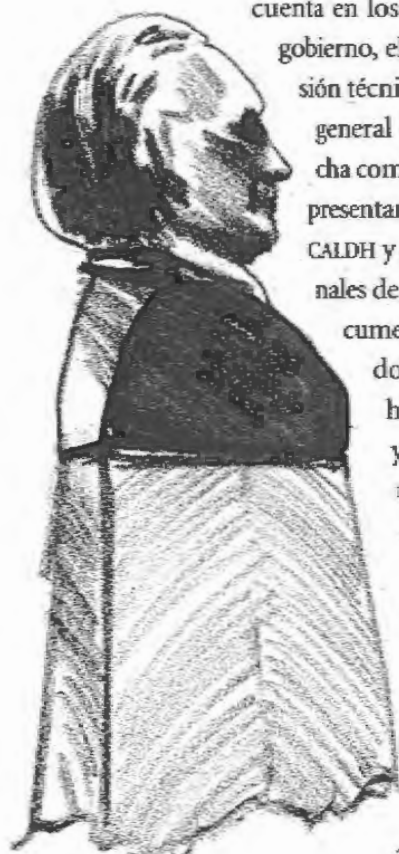
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala también considera que aún existe confusión de términos, por lo que hace una serie de recomendaciones específicas respecto a la redacción del articulado. Finalmente, a esta segunda ronda de discusión se añan los comentarios de una organización internacional. Kate Martin, del Center For National Security Studies, señala que ellos han realizado un análisis a dicho anteproyecto bajo la perspectiva de criterios internacionales en derechos humanos, en especial, en lo referente a derecho a la información y libertad de expresión. De allí que una de las principales preocupaciones de esta organización sea la poca claridad y la confusión de términos que se evidencian en el documento. Por lo anterior, recomiendan que los anteproyectos contengan una redacción más clara y simple, pues eso garantiza en gran medida mayor funcionamiento de la ley. Así también, hacen referencia a separar los distintos ámbitos que tratan ambas leyes, pues se generan confusiones y contradicciones (acceso a la información, *habeas data*, etc.). En conclusión, los participantes señala-



ron que la ley sigue siendo restrictiva, confusa y con procedimientos parciales. Y es que hay que tomar en cuenta, como señala Fernández, que la oscuridad, la ambigüedad y el dogmatismo, pueden determinar que el dispositivo legal no sea comprensible para el ciudadano medio al que está destinado, sino que la falta de integración del dispositivo mismo en el conjunto del ordenamiento jurídico-administrativo, puede conllevar a que los mismos agentes públicos tengan la percepción de que dicho derecho es un elemento anómalo para el sistema.¹⁰

En octubre de ese mismo año, según consta en el memorando 26-2000 emitido por la SAE, se convoca a una reunión para conocer la tercera versión del anteproyecto de ley y el segundo borrador de anteproyecto sobre secretos oficiales. Debido a las constantes quejas de las organizaciones civiles debido a que sus propuestas no estaban siendo tomadas en

¹⁰ Fernández Ramos, *op. cit.*, p. 26.



cuenta en los nuevos documentos que elaboraba el gobierno, el 25 de octubre se conforma una comisión técnica la cual fue aprobada por la asamblea general de todos las organizaciones civiles. Dicha comisión queda integrada por abogados representantes de la SAE, la Fundación Myrna Mack, CALDH y el Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Esta comisión evalúa el documento emitido por la SAE y elabora otro documento, en el cual señalan que se le había dado un nuevo orden al anteproyecto sistematizando la parte considerativa conforme al marco conceptual del documento original.

Asimismo, se planteó una nueva estructura para la iniciativa de ley, partiendo de la idea de integrar los tres grandes temas que abarca la misma: acceso a los actos de la administración pública en general, acceso a datos personales en archivos estatales y acceso a datos personales en archivos privados.

Debido al reordenamiento también se integró una nueva versión sobre la exposición de motivos de la ley. Finalmente, al replantearse una nueva estructura del anteproyecto, las propuestas originales fueron ampliadas adicionándose aspectos como la legalidad, características básicas de archivos, nuevas normativas y procedimientos, entre otros.

A estas alturas de la discusión, el cuarto borrador ya había sido objeto de considerables modificaciones. Aún cuando había un reconocimiento por los avances significativos que se habían logrado con la conformación de la comisión técnica, todavía existían muchos disensos entre las organizaciones civiles y los representantes del gobierno, pues consideraban que había una conceptualización equívoca entre el tema de acceso a la

información y el *habeas data*, así como la secretividad de los documentos que manejan las entidades de Inteligencia de la Presidencia.

Según los representantes de las organizaciones civiles, el Gobierno representado por la SAE, rompió el procedimiento de la discusión unos días antes de que se realizara la reunión en la cual se revisaría, artículo por artículo, el anteproyecto elaborado por la comisión técnica y sorpresivamente, el 27 de marzo de 2001 la SAE convoca nuevamente a una reunión para discutir el quinto borrador del anteproyecto, denominado Documento C. Este último documento recogía algunas propuestas de las organizaciones civiles, pero finalmente, habría sido elaborado de manera unilateral por parte del gobierno.

Las organizaciones civiles manifestaron su descontento ante la postura oficial, en especial por haber violado los acuerdos respecto a la metodología de trabajo acordada, razón por la cual se negaron a revisar el documento. Ante esto, el responsable de la SAE respondió a las organizaciones, justificando que había una serie de presiones y compromisos en el gobierno para que el documento estuviera finalizado lo antes posible. Asimismo, presentó por primera vez el documento a los medios de comunicación, sin embargo, no hubo mayores discusiones sobre el tema. Y es que no hay que olvidar que los medios no estuvieron invitados a la discusión, a lo que se aúna la poca importancia que le han otorgado a esta temática. Por lo anterior, es comprensible que el acceso a la información no sea un tema conocido por la ciudadanía, ya que no ha pasado a formar parte de la agenda de los medios y ha estado alejada de toda discusión por parte de los líderes de opinión.

Para el 11 de diciembre de 2001, la Presidencia de la República remitió al Organismo Legislativo la iniciativa, que fue trasladada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No obstante, no es el único anteproyecto de esa naturaleza que está analizando la comisión legislativa, ya que anteriormente una diputada habría presentado una iniciativa sobre el *habeas data*. Asimismo, el 20 de febrero de 2002, otros dos legisladores presentaron un anteproyecto denominado Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y, finalmente, el 9 de abril del mismo

año, otro parlamentario presentó una iniciativa para regular el acceso a la información pública y privada.

Finalmente, el documento presentado por el gobierno recoge los tres grandes ámbitos o temáticas antes mencionadas: a) lo relativo a la información en poder de los organismos y entidades estatales, en armonía con la publicidad de los actos de la administración, establecida en el artículo 30 constitucional; b) lo relativo al acceso a datos personales en archivos y registros estatales, según el artículo constitucional número 31 y; c) lo concerniente al acceso a datos personales en archivos y registros privados que no sean para un uso exclusivamente personal. También, los fundamentos de la ley ahora se basan en preceptos que establece la Constitución Política de la República, convenios internacionales relevantes ratificados por Guatemala, declaraciones del sistema internacional al que pertenece el país, así como en requerimientos que señalan los Acuerdos de Paz.

130

A MANERA DE EPÍLOGO

Aún cuando la discusión se vio violentada al final y las organizaciones civiles ya no participaron en la finalización del documento, muchas de ellas están complacidas de alguna forma, ya que muchas de sus propuestas fueron tomadas en cuenta y hay muchos avances logrados en la estructura del anteproyecto. Falta ver cuál será la actitud de los integrantes del Congreso de la República, quienes tienen la última palabra: aprobarla como la han recibido o modificarla totalmente. Resta ver ahora cuál será la postura de otros sectores como el académico, que aún está en tiempo de ofrecer aportes importantísimos y la de los medios de comunicación: o acompañan decididamente un proceso de construcción democrático y de ciudadanización, en el cual ellos serán altamente beneficiados o, simplemente, jugaran el papel de transmisores de información.

Y es que lo que no hay que olvidar es que el beneficio de este derecho no debe ser entendido sólo desde la perspectiva de lo que garantiza el



derecho mismo, sino también desde los resultados ulteriores que produce el establecimiento de una institución de esta naturaleza. "No hay recurso más poderoso para debilitar y desterrar las prácticas de corrupción y alentar los procesos democráticos que establecer, por mandato de ley, la obligación de los poderes públicos de entregar la información que los ciudadanos demanden, salvo la que quede en reserva por ley".¹¹

El establecimiento de un derecho universal como éste o la reglamentación del mismo como es el caso guatemalteco dentro del derecho positivo vigente de un país, como señala Escobedo, puede conmocionar al conjunto de poderes públicos en un sentido positivo y coadyuvar a la institucionalización de una cultura de transparencia y de disminución de la corrupción. Asimismo, también puede implicar un avance en el incremento de la eficacia y eficiencia de los servidores públicos, de la rendición de cuentas y de la utilización más honesta y eficiente de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. A pesar de que es incierto el destino del anteproyecto de ley sobre Acceso a la Información Pública, si no se articulan procesos para socializar el mismo frente a la ciudadanía, probablemente se tenga un instrumento legal inútil y se continúe con la cultura del secreto, la discrecionalidad y la impunidad de los gobernantes frente a los ciudadanos.

Como indica Fernández, para que un sistema de acceso a información sea efectivo son indispensables ciertas condiciones: en primer lugar, una regulación clara que defina los confines entre publicidad y el secreto, así

131

¹¹ Juan Francisco Escobedo, *Revista Iberoamericana de Comunicación*, México, núm. 1, año 2001, p. 38.



132 como la existencia de una norma adecuada para el procedimiento de acceso (debe ser comprensible para el ciudadano medio al que está destinada, una legislación vaga genera ambigüedad, lo que implica facilidad de eludir la responsabilidad por parte de la administración); en segundo lugar, es preciso adecuar las estructuras administrativas a las exigencias prácticas derivadas del reconocimiento de este derecho y, por último, es preciso sensibilizar al personal al servicio de la administración para la aplicación de un derecho que representa una innovación radical en las relaciones entre la administración y los ciudadanos. "Muchos de estos cambios de hábitos no sólo se logran mediante cambios legislativos, sino requiere todo un cambio cultural y de una ardua y sostenida labor".¹²

Tener información, pues, implica una mayor posibilidad de tomar decisiones conscientes en función de un ejercicio ciudadano. Esta nueva forma de participación social se convierte en una forma de "hacer" ciudadanía, más allá de la forma tradicional que representa el voto. Así las cosas, una mayor participación del ciudadano dentro de un espacio público en beneficio de aportar, apoyar o modificar una agenda pública, puede conducir al traslado de una democracia representativa a una democracia deliberativa, un estadio aún muy lejos de alcanzar, al menos, en Guatemala.

¹² Fernández Ramos, *op. cit.*, p. 25.

BIBLIOGRAFÍA

- Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, 2000-2001, Documentos de discusión sobre Anteproyecto de Acceso a la Información Pública.
- DAHL, Robert, 1999, *La democracia, una guía para los ciudadanos*, Taurus, Buenos Aires, p. 7.
- ESCOBEDO, Juan Francisco, 2001, *Revista Iberoamericana de Comunicación*, UIA-Santa Fe, núm. 1, p. 38.
- FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano, 1997, *El derecho de acceso a los documentos administrativos*, Editorial Marcial Pons, Madrid.
- Fundación Myrna Mack, 2000-2001, Documentos de discusión sobre Anteproyecto de Acceso a la Información Pública.
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, 2000-2001, Documentos de discusión sobre Anteproyecto de Acceso a la Información Pública.
- MORLINO, Leonardo, 1993, "Los autoritarismos", en Pasquino, Gianfranco, *et al.*, *Manual de Ciencia Política*, Madrid, Alianza, p. 131.
- Secretaría de Análisis Estratégicos, 2000-2001, Anteproyecto sobre Acceso a Información Pública, Presidencia de la República.
- Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia, 2000-2001, Documentos de discusión sobre Anteproyecto de Acceso a la Información Pública.